

En la sesión extraordinaria efectuada el trece de noviembre de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

Acuerdo recaído a la consulta formulada por Alejandro Martín García García, respecto de la integración de fórmulas de candidaturas para diputaciones por el principio de representación proporcional.

ANTECEDENTES:

Escrito de consulta

I. El tres de noviembre de dos mil veinte, se recibió en este Instituto el escrito signado por Alejandro Martín García García, mediante el cual fórmula una consulta en los siguientes términos:

«En ejercicio del artículo 8 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, vengo, de forma respetuosa a plantear una consulta, misma que solicito me sea remitida vía correo electrónico a la dirección [...].

Quiero saber si es posible que, dentro de la lista de postulación a diputaciones por el principio de representación proporcional, un partido político pueda postular a un hombre como titular y a una mujer como suplente en la misma fórmula, de tal suerte que al final de la integración, existan más mujeres postuladas que hombres. Es decir, respetando el 50% de postulación de mujeres en su calidad de propietarias de la lista, y en las suplentes existan más mujeres postuladas.»

CONSIDERANDO:

Personalidad jurídica del Instituto y principios que rigen su actuación

1. El artículo 77, párrafos primero y segundo, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, establece que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato* y la propia *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*. De igual manera, se señala que será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Asimismo, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en materia electoral, en los términos que establecen los ordenamientos jurídicos antes citados y la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*.

Órgano superior de dirección

2. El artículo 81 de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, señala que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, al que corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.

Integración del Consejo General

3. El artículo 82, párrafo primero, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, indica que el Consejo General se integra por un consejero presidente y seis consejeras y consejeros electorales, con derecho a voz y voto; la Secretaría Ejecutiva y representantes de los partidos políticos con registro nacional y estatal, quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz.

Atribución del Consejo General para desahogar consultas

4. De conformidad con el artículo 92, fracción XXVI, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, es atribución del Consejo General desahogar las dudas que se le presenten sobre la aplicación e interpretación de dicho ordenamiento legal.

Respuesta a la consulta

5. Respecto a la consulta planteada por el ciudadano Alejandro Martín García García, referida en el antecedente I, relativa a la posibilidad de que, dentro de la lista de candidaturas de diputaciones por el principio de representación proporcional, un partido político pueda postular a un hombre como titular y a una mujer como suplente en la misma fórmula, este Consejo General considera que ello es posible, tomando en consideración los siguientes razonamientos y fundamentos:

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, al resolver la contradicción de tesis con número de expediente 275/2015, que el principio de paridad de género es una medida para garantizar la igualdad sustantiva de los géneros en el acceso a cargos de elección popular.

Se trata, según la Corte, de una herramienta constitucional de carácter permanente cuyo objetivo es hacer efectivos, en el ámbito electoral, los principios de igualdad entre el hombre y la mujer previstos en los artículos 1 y 4 constitucionales, así como en múltiples instrumentos internacionales ratificados por México.

En efecto, la paridad de género es el principio que se traduce en garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política. Es un criterio establecido para asegurar la participación igualitaria en los procesos electorales.

En la resolución de la misma contradicción de tesis, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que de la interpretación gramatical, teleológica, sistemático-funcional e histórica del artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, se desprende que el principio de paridad entre los géneros trasciende a la integración de los órganos representativos de las entidades federativas y, por lo tanto, no se agota en el registro o postulación de candidaturas por parte de los partidos políticos antes de la jornada electoral.

Es por ello que las entidades federativas se encuentran constitucionalmente obligadas a establecer en su normativa local acciones tendientes a la paridad de género para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional a los partidos políticos con derecho a escaños, así como para la integración de los ayuntamientos. Conforme al máximo tribunal del país, pueden existir múltiples variantes en la implementación de tales medidas en el ámbito local, en atención a la libertad configurativa de las entidades federativas.

Ahora bien, los numerales 1 y 2 del artículo 21 de la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, establecen que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; y toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

De igual manera el numeral 1 del artículo 2 del *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, prevé que cada uno de los Estados Partes se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el mismo, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El artículo 3 señala que los Estados Parte se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos.

Los incisos a), b) y c) del artículo 25 del referido Pacto establecen que todas las ciudadanas y ciudadanos gozarán, sin distinciones ni restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

- a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
- b) Votar y ser electas y electos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad del electorado; y
- c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

De la misma manera, el artículo 2 de la *Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer*, prevé que las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.

Por su parte, el artículo 3 de dicha Convención establece que las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

Adicional a lo anterior los incisos a), b) y c) del artículo 7 de la *Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres* (CEDAW), señalan que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; y participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

El artículo 8 de dicha Convención establece que los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.

En este orden de ideas y conforme a lo establecido en el artículo 41, Base I, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, los partidos políticos tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal,

libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

En este contexto, el seis de junio de dos mil diecinueve, se reformó la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* y en el segundo párrafo del artículo 41, así como en su Base I, primer y segundo párrafos, y en atención a los transitorios segundo, tercero y cuarto del decreto de reforma correspondiente, se estableció el principio de paridad de género en todos los órganos públicos y de decisión política.

La incorporación de la paridad de género como un principio constitucional resulta ser de gran importancia, dado que éstos se refieren a los valores superiores que son aplicables a todo el régimen jurídico. De esta manera, el principio de paridad se introduce como una medida estratégica, indispensable y permanente frente a la subrepresentación histórica de las mujeres en los órganos de representación política, a fin de cumplir con la obligación del Estado de generar las condiciones para el ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres.

Ahora bien, el artículo 6, numerales 2 y 3 de la *Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales*, señala que el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales, los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

El artículo 7, numeral 1, de la citada ley indica que es derecho de las ciudadanas y ciudadanos y obligaciones para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre mujeres y hombres para tener acceso a cargos de elección popular.

De igual manera la *Ley General de Partidos Políticos*, en su artículo 3, numeral 4, establece que: «Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.»

El artículo 25, numeral 1, inciso r), de la *Ley General de Partidos Políticos* establece como obligación de los partidos políticos garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladoras y legisladores federales y locales.

En esta tesitura la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato* establece, respecto de la integración del Congreso del estado y el principio de paridad de género, lo siguiente:

«**Artículo 41.** El Congreso del Estado de Guanajuato se compondrá de representantes populares electos en su totalidad cada tres años, mediante votación libre, directa y secreta. Por cada Diputado Propietario se elegirá un Suplente.

En la integración del Congreso del Estado de Guanajuato, esta Constitución y la ley electoral determinarán los mecanismos para cumplir con el principio de paridad de género.»

Ahora bien, el veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado diversas reformas a la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*.

Entre las reformas destaca, en cuanto al tema que nos ocupa, la modificación a los artículos 185 y 186, así como la adición de los artículos 185 Bis, 185 Ter, 185 Cuater, 185 Quinquies y 185 Sexies. El sentido de tales disposiciones legales consiste principalmente en precisar la obligación de partidos políticos y coaliciones de postular de manera paritaria a mujeres y hombres a cargos de elección popular, mediante la determinación de bloques de distritos y municipios en que hayan obtenido, en el proceso electoral anterior, niveles de votación alto, medio y bajo.

En esta tesitura en la sesión extraordinaria efectuada el cuatro de septiembre de dos mil veinte, este Consejo General emitió el acuerdo CGIEEG/044/2020, mediante el cual se aprobaron los *Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación y registro de candidaturas, así como en la integración del Congreso del estado y ayuntamientos, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021*.

En los lineamientos en cita, en su artículo 9 fracción II, se establece que las fórmulas de candidaturas para diputaciones por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional se conformarán por dos personas del mismo género o por un hombre propietario y una mujer como suplente, precepto que al texto indica:

«**Artículo 9.** Las fórmulas de candidaturas para diputaciones por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional se conformarán de la manera siguiente:

- I. Por dos personas del mismo género; ó
- II. Por un hombre propietario y una mujer como suplente.

No se registrarán fórmulas de candidaturas en que un hombre sea suplente de una mujer.»

Cabe mencionar que lo establecido en el artículo 9 de los lineamientos en comento es acorde a la tesis XII/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la cual: «la exigencia de que las fórmulas de candidaturas estén integradas por personas del mismo sexo debe interpretarse con una perspectiva de género que atienda a los principios de igualdad y paridad, y promueva en mayor medida la participación de las mujeres en la vida política del país y en la integración de los órganos de representación popular. Por tanto, tratándose de la postulación de fórmulas encabezadas por hombres, la posición de suplente puede ser ocupada, de manera indistinta, por un hombre o una mujer».¹

Por todo lo razonado en el presente considerando y de conformidad con el artículo 9 fracción II de los *Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación y registro de candidaturas, así como en la integración del Congreso del estado y ayuntamientos, en el proceso electoral local ordinario 2020-2021*; tratándose de la postulación de fórmulas de candidaturas a diputaciones encabezadas por hombres, la posición de suplente puede ser ocupada por una mujer.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafo segundo, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, así como 77 párrafos primero y segundo, 81, 92 fracción XXVI, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. En los términos precisados en el considerando **5** del presente acuerdo, se da respuesta al escrito signado por el ciudadano Alejandro Martín García García.

SEGUNDO. Con copia certificada del presente acuerdo notifíquese personalmente al ciudadano Alejandro Martín García García.

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la página electrónica del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

Notifíquese por estrados.

¹ Sexta Época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 47 y 48.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*, firman este acuerdo el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la Secretaria Ejecutiva del mismo.